

Pakistán, del caos al inicio de la transición democrática

Georgina Higuera
Corresponsal de *El País* en Asia-Pacífico

Resumen

Pakistán, el único país del mundo musulmán que posee la bomba atómica, vivió en 2007 uno de los períodos más convulsos de sus sesenta años de historia. Desde su traumática separación de India, Pakistán ha vivido sometido a férreas dictaduras, que han pisoteado los reiterados intentos de establecer una democracia. Los cortos períodos de poder civil no han permitido enraizar ni la defensa de los derechos humanos, ni los principios democráticos, ni una clase política capaz de abstenerse de la corrupción que corroe todas las instituciones del Estado y siembra la frustración y el desencanto entre la población. Desde el golpe de Estado del que fuera protagonista en 1995, el general Pervez Musharraf ha ostentado la jefatura del ejército y la presidencia del país, realizando un complejo juego de equilibrios para prestar su colaboración a los intereses de EEUU en Afganistán (para los que ha sido un aliado imprescindible), liderar un país musulmán en el que el extremismo religioso radical está muy presente, y confrontar los múltiples conflictos internos de carácter étnico, expresiones del malestar en auge de grupos como los baluchies, sindies o los pashtunes, que se ven excluidos del ejército y del resto de instituciones relevantes del país, en manos de la etnia punjabí. Sin embargo, este tradicional equilibrio precario se ha tambaleado de manera determinante en 2007, debido a una creciente oposición al talante autoritario de Musharraf simbolizada por la judicatura, y que ha contribuido a abrir rendijas hacia las que avanzar en pos de un sistema plenamente democrático. Aprovechando la convocatoria de elecciones en febrero de 2008, se autorizó el regreso de los representantes de los principales partidos políticos en la oposición, exiliados como Nawaz Sharif o Benazir Bhutto, que regresaron a Pakistán para concurrir a los comicios. Pese a las esperanzas creadas, en diciembre la ex presidenta Bhutto sufría un segundo atentado que en esta ocasión ponía fin a su vida de manera violenta y provocaba una profunda conmoción en el país y en todo el mundo. Sin embargo, las elecciones del 18 de febrero de 2008, devolvieron a millones de pakistaníes que creen en la democracia la esperanza y la satisfacción de mostrar al mundo que con su voto pueden cambiar la imagen de extremismo y violencia que persigue al país.

“Pakistán, el único país del mundo musulmán que posee la bomba atómica, vivió en 2007 uno de los períodos más convulsos de sus sesenta años de historia.”

Introducción

El año 2007 fue para la República Islámica, unos de los más convulsos y violentos de sus sesenta años de historia, debido al recrudecimiento de los diversos conflictos activos en el país. Sin embargo, el año finalizaba con una mejora de las perspectivas, con las elecciones del 18 de febrero de 2008, que devolvieron a millones de pakistaníes que creen en la democracia, la esperanza y la satisfacción de mostrar al mundo votando pueden cambiar la imagen de extremismo y violencia que persigue al país. Los comicios, considerados un referéndum sobre el presidente Pervez Musharraf, tuvieron como resultado el derrumbe del partido gobernante, la Liga Musulmana de Pakistán-Q (PML-Q), y de las fuerzas integristas religiosas (MMA). Los partidos moderados y progresistas emergieron como grandes triunfadores de una jornada electoral que, contra todos los pronósticos, fue relativamente pacífica. Aunque no hubo ningún incidente grave, los tiroteos entre simpatizantes de partidos rivales y los pequeños disturbios dejaron 15 muertos.

La campaña electoral había estado dominada por el miedo después del traumático asesinato de la popular líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Benazir Bhutto, durante un mitin electoral en Rawalpindi, el 27 de diciembre. Otras 3.447 personas, según el Instituto Pakistání de Estudios para la Paz, murieron también víctimas de la violencia que azotó el país a lo largo de 2007, y que dejó heridas a 5.353. El día antes de los comicios un nuevo atentado en Parachinar, capital de la zona tribal de Kurram, se cobró la vida de otras 37 personas.

La crispación y la tremenda impopularidad de Musharraf planeaban sobre las elecciones. Días antes, las encuestas revelaban que tres de cada cuatro pakistaníes querían que el presidente abandonara el poder y un 70% le consideraba “el problema” más que la solución de la crisis que atraviesa el país desde que en marzo pasado se iniciara el pulso entre el jefe del Estado –entonces también jefe del ejército– y el presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Chaudry. La serie de errores políticos cometidos desde entonces por el general, que presionado por Estados Unidos colgó el uniforme el

28 de noviembre, le han robado la *medalla*, que le corresponde por cumplir el compromiso de que las elecciones serían “limpias, libres y transparentes”.

En realidad, lo que permitió el resultado electoral fue la voluntad del nuevo jefe del ejército, general Ashfaq Pervez Kiyani, de 55 años, de mantener las fuerzas armadas y los servicios secretos al margen y dar una oportunidad a los políticos. A Kiyani, un militar muy respetado no sólo en las filas castrenses sino también en los distintos círculos del poder y de la sociedad, se atribuye una “lealtad absoluta” hacia su mentor, pero su perfil biográfico revela que con anterioridad fue consejero militar de Bhutto en su primer Gobierno (1988-1990).

El nuevo hombre fuerte de Pakistán, aunque no haya enseñado los músculos, se formó en EEUU, que le considera “un moderado”. Director entre 2004 y 2006 del ISI –el todopoderoso Servicio de Inteligencia que durante la dictadura de Mohamed Zia ul Haq se convirtió en un Estado dentro del Estado–, mantiene buenas relaciones con los servicios secretos estadounidenses y el Pentágono. Kiyani negoció el acuerdo Musharraf-Bhutto, con el que Washington pretendía dar una imagen democrática a su “fiel aliado” en la “guerra contra el terror”.

El llamado Acuerdo de Reconciliación Nacional, firmado en octubre tras meses de negociaciones, suponía la cohabitación de Bhutto como jefa de Gobierno tras unas elecciones libres, con Musharraf, como presidente. Antes de esto, Bhutto –autoteñida en 2000 para evitar un juicio por corrupción– debía ser liberada de los cargos pendientes para facilitar su vuelta al país, y el general debía colgar el uniforme. La resistencia de Musharraf a dejar el mando del ejército puso en suspenso el acuerdo, sobre todo después de la declaración del estado de emergencia, el 3 de noviembre.

Serías presiones de EEUU y la Unión Europea hicieron que Musharraf se aviniera a pasar a la reserva de las fuerzas armadas y a levantar dos semanas más tarde, el 15 de diciembre, las medidas de excepción. Con ello arrancó la campaña electoral para unas elecciones que debieran de haberse celebrado el 8 de enero, y que se retrasaron por el asesinato de la líder del PPP.

El jefe de la misión de observadores de la Unión Europea, Michael Gahler, que durante dos meses tuvo a un centenar de miembros observando el proceso electoral destacó que las elecciones se desarrollaron “mejor de lo que se esperaba”, aunque señaló “problemas significativos”. Entre ellos,

el favoritismo de las autoridades hacia los candidatos de la coalición gubernamental, las restricciones para convertirse en candidato y el escaso apoyo a las mujeres para que ejercieran su derecho de voto.

Desde su traumática separación de India, Pakistán ha vivido sometido a férreas dictaduras, que han pisoteado los reiterados intentos de la establecer una democracia. Los cortos periodos de poder civil no han permitido enraizar ni la defensa de los derechos humanos básicos, ni los principios democráticos, ni una clase política capaz de abstenerse de la corrupción rampante que corroe todas las instituciones del Estado y siembra la frustración y el desencanto entre la población.

El apoyo incondicional de EEUU a Musharraf tampoco ha contribuido al florecimiento de la democracia ni a la transparencia, sino más bien todo lo contrario. Desde los atentados de 2001, la ayuda de Washington a Pakistán ha ascendido a 10.000 millones de dólares, más de la mitad de los cuales fueron entregados al jefe del ejército para modernizar las fuerzas armadas, adquirir nuevo armamento y elevar

la capacidad combativa de los militares contra los talibanes y los miembros de Al Qaeda.

El dinero –unos 80 millones de dólares mensuales– se envía trimestralmente con un recibo pero no requiere la justificación de los gastos. Se considera el “pago” por el empleo en la

guerra contra el terror del ejército y de los organismos de seguridad pakistaníes, como el ISI, el Buró de Información (IB) y otras agencias vinculadas a los ministerios de Defensa e Interior. Toda una opaca lluvia de dinero norteamericano.

La *generosidad* de EEUU con los militares pakistaníes no es nueva. India estableció desde su independencia unas relaciones privilegiadas con la Unión Soviética y Pakistán se dedicó a cultivarlas con Washington, que no dudó en facilitarle el armamento requerido, desde tanques a cazas F-16, con los que el “país de los puros” ha librado tres guerras contra India desde 1947 por la cuestión de Cachemira y por la secesión, en 1971, de la parte oriental del país, Bangladesh. Además, durante la ocupación soviética de Afganistán (1979-1989), Zia ul Haq, un dictador sin escrúpulos, recibió 15.000 millones de dólares en ayuda.

Los 2.912 kilómetros que separan India y Pakistán –dos Estados nucleares desde 1998– siguen siendo, pese a lo el fuego acordado en 2004, la zona más militarizada del mundo. Aunque las relaciones bilaterales hayan mejorado considerablemente en estos años, Islamabad no ha recono-

“ Desde su traumática separación de India, Pakistán ha vivido sometido a férreas dictaduras, que han pisoteado los reiterados intentos de la establecer una democracia. Los cortos periodos de poder civil no han permitido enraizar ni la defensa de los derechos humanos básicos, ni los principios democráticos”

cido que fuese un error su anterior política de entrenar guerrilleros para luchar por la liberación de Cachemira, una región que permanece en disputa. El temor a que ocurra un incidente que vuelva a incendiar las relaciones persiste, como sucedió en 2002, cuando un ataque al Parlamento indio situó a los dos vecinos atómicos al borde de un enfrentamiento de incalculables consecuencias. El fuego que alienta los extremismos religiosos, tanto islámico como hindú, y sus conexiones con las mafias y el tráfico de armas hace que la zona siga teniendo una gran volatilidad.

En la actualidad, Islamabad dedica el 28% de su presupuesto nacional a su poderoso ejército, que tiene 500.000 hombres. No contentos con los privilegios de que disfrutaban, los militares han montado un gigantesco conglomerado industrial, financiero y de servicios que supone el 35% del Producto Interior Bruto del país, según revela el libro *Military Inc.: Inside Pakistan's military economy* (Pluto Press, 2007), de la analista pakistaní Ayesha Siddiqi.

Las medidas de liberalización de la economía introducidas por el régimen militar mejoraron sensiblemente la situación financiera del país, que ha mantenido un alto crecimiento económico durante estos años, en torno al 5% de media. Sin embargo, tres de cada cuatro pakistaníes no se han beneficiado de esta bonanza. Las ONG internacionales denuncian que el 74% de la población vive con menos de un euro por persona y día; que Pakistán es el tercer país de Asia en mortalidad infantil, por debajo sólo de Afganistán y Myanmar, y que los índices de analfabetismo siguen siendo altísimos, el 45% de los 165 millones de habitantes.

Además, la crisis energética desatada en 2007, que según los expertos empeorará durante los próximos dos o tres años por la falta de infraestructuras, y la inflación en torno al 30% de los productos alimenticios básicos –harina, arroz, aceite– afectan a la absoluta mayoría de la población y pintan un oscuro panorama para el futuro a corto y medio plazo. “Cuando Musharraf dio el golpe en 1999, el *nan* (pan) costaba una rupia (un euro equivale a 89 rupias), ahora vale cinco”, decía Izaj Mugal, un pequeño comerciante, de 58 años, para explicar por qué había votado a la Liga Musulmana de Pakistán-N (PML-N).

Bajo estas difíciles circunstancias, comienza la transición política hacia la democracia, en la que el sentimiento anti-Musharraf es la fuerza que trata de unir a los vencedores de los comicios: el PPP de la malograda Bhutto y la PML-N, que lidera Nawaz Sharif. Ambas formaciones pidieron al presidente que escuchara el voto de no confianza emitido por el

pueblo y respetara con su dimisión el veredicto. Pero como corresponde a quien detenta de forma ilegítima un cargo, Musharraf aseguró que seguirá en la presidencia como “padre” de los pakistaníes y de la transición. A finales de febrero, sin embargo, su situación parecía insostenible.

La mayoría de los pakistaníes apoya, según una encuesta de Gallup publicada el 25 de febrero por el diario en inglés *The Nation*, el acuerdo de principio alcanzado entre Asif Ali Zardari, viudo de Bhutto y copresidente del PPP, y Sharif. Pero si finalmente el acuerdo se materializa, pocos son los que confían en que sea de larga duración. Analistas, diplomáticos y ciudadanos de a pie creen que los resultados electorales no garantizan la estabilidad de Pakistán sino que ponen al descubierto la caja de Pandora de la política de un país corrompido por las dictaduras militares y situado en un estratégico cruce de caminos de los intereses con-

trapuestos de Estados Unidos, China y Federación Rusa, además de los de sus vecinos India, Irán y Afganistán.

La Asamblea Nacional de Pakistán tiene 342 escaños, pero sólo 272 de ellos son elegidos por sufragio universal. Los res-

tantes 70 corresponden a las cuotas de mujeres –60 escaños– y de no musulmanes (cristianos e hindúes) –10–, que los partidos asignan automáticamente según la representatividad obtenida. La muerte y el asesinato de tres candidatas, además del de Benazir Bhutto, hizo que sólo se eligieran 268 diputados. En los próximos meses se convocarán unas elecciones parciales para cubrir los cuatro escaños vacantes.

Con un Parlamento en el que ningún partido tiene una clara mayoría, las fuerzas anti-Musharraf quieren aliarse para forzar su destitución y restablecer la Constitución de 1973 limpia de todas las enmiendas realizadas por su dictadura y la de Zia, que dotaron al jefe del Estado de poderes extraordinarios. Ambas iniciativas requieren el voto de dos tercios de las cámaras y si bien pueden lograrlo en la Asamblea Nacional, parece difícil en el Senado, que sigue controlado por la PML-Q, aunque no se descarta que muchos senadores abandonen el barco que se hunde para subirse al que va a toda vela, el de la PML-N.

Los comicios para la cámara alta son cada seis años y los últimos se celebraron en febrero de 2003, por tanto, a sus miembros les queda un año de mandato. De los 100 escaños del Senado, 22 corresponden a cada una de las cuatro provincias. Otros 8 son para las Áreas Tribales de Administración Federal (FATA) y los 4 restantes para Islamabad, como capital federal.

“Islamabad dedica el 28% de su presupuesto nacional a su poderoso ejército (...) No contentos con los privilegios de que disfrutaban, los militares han montado un gigantesco conglomerado industrial, financiero y de servicios que supone el 35% del Producto Interior Bruto del país”

La PML-Q fue creada por Musharraf en 2001, con el objetivo de dotar de un Parlamento al régimen militar instaurado tras el golpe y darle un *aspecto democrático* para que la Administración Bush justificara con mayor comodidad ante el Congreso la mejora de las relaciones con Islamabad. Washington mantenía unas frías relaciones con el Gobierno de Nawaz Sharif, que había desobedecido la orden de no realizar pruebas nucleares –decisión “inadmisible” para EEUU– y convertido a Pakistán en el primer país musulmán con armamento atómico. En las fraudulentas elecciones generales de 2002, la PML-Q obtuvo 118 escaños, mientras que en 2008 su presencia en la Asamblea Nacional ha quedado reducida a 39 diputados.

Las negociaciones entre los enemigos históricos, PPP y PML-N, son aún más difíciles porque los principales dirigentes –Zardari y Sharif– están fuera del Parlamento, aunque sin duda aprovecharán las elecciones parciales de los cuatro escaños vacantes para entrar en la cámara. Zardari no fue candidato porque su fama de corrupto –durante los Gobiernos de Benazir (1988-1990 y 1993-1996) le llamaban *Mister 10%*– era un lastre para el PPP. En cuanto a Sharif, su candidatura fue rechazada por la Comisión Electoral porque el régimen consideró que ya había hecho bastante con permitirle volver al país antes de cumplir el acuerdo de 10 años de exilio con el que conmutó, en el año 2000, su condena a cadena perpetua por corrupción.

Para salvarse, Musharraf está azuzando los odios existentes entre Zardari y Sharif y trata de manipular y utilizar los tiempos a su conveniencia, aunque lo tiene muy difícil. Los abogados, los activistas y la sociedad civil no parecen dispuestos a perdonarle los palos recibidos durante las numerosas manifestaciones habidas el año pasado. Mucho menos, que el 3 de noviembre pasado declarara el estado de emergencia, destituyera a los jueces del Tribunal Supremo, suspendiera la Constitución, restringiera la libertad de expresión, cerrara los principales canales de televisión privada y detuviera a unos 5.500 opositores a estas medidas.

Aitzaz Ahsan, presidente de la Asociación de Abogados del Supremo, abanderó la exigencia del restablecimiento en sus puestos de Iftijar Chaudry como presidente del Supremo, y de los restantes 62 jueces fulminados por Musharraf durante el estado de excepción. Ahsan, senador del PPP, fue quien defendió a Chaudry tras la primera destitución del magistrado, en marzo de 2007, por insinuar que la reelección del general como jefe de Estado sería inconstitucional si antes no se había quitado el uniforme. El abogado logró que, cua-

tro meses después, los jueces del Supremo devolvieran el cargo a Chaudry.

Ahsan, que permaneció bajo arresto domiciliario en la ciudad de Lahore entre el 3 de noviembre y el 21 de febrero, nada más recuperar su libertad comenzó a movilizar a los partidos y a la sociedad civil para que exigieran la vuelta de los jueces antes del 9 de marzo, fecha del inicio del primer asalto entre la jefatura del Estado y la justicia. El letrado, de 62 años, amenazó con encabezar una marcha multitudinaria de abogados, defensores de derechos humanos y miembros de la sociedad civil si para entonces los jueces no están en sus cargos.

Chaudry, que se ha convertido en el enemigo acérrimo de Musharraf, seguía el 26 de febrero encerrado por orden presidencial en su casa de Islamabad, guardado por decenas de policías parapetados tras bloques de cementos y alambre de espino para cerrar el paso a todo persona ajena a la zona.

“ Los resultados electorales (...) ponen al descubierto la caja de Pandora de la política de un país corrompido por las dictaduras militares y situado en un estratégico cruce de caminos de los intereses contrapuestos de Estados Unidos, China y Federación Rusa, además de los de sus vecinos India, Irán y Afganistán.”

“Que no se permitiera a Chaudry votar (en las legislativas) es

un caso de violación de los derechos humanos, porque se negó su derecho a ejercer el voto”, afirmó el eurodiputado británico Robert Evans, en la conferencia de prensa de la Misión de Observadores de la Unión Europea. Evans, que destacó que los comicios fueron un “paso esperanzador hacia la democratización total”, se mostró confiado en que los partidos fuesen capaces de formar una coalición que facilite la gobernabilidad del país.

Además de las incompatibilidades ideológicas, el principal escollo para formar coaliciones en Pakistán son los odios personales. Fue Sharif quien envió a Zardari a las mazmorras, por acusaciones que van desde intento de secuestro a asesinato y corrupción, las dos veces en que ganó las elecciones después de que fueran disueltos los gobiernos de Bhutto. Y en Sharif se huele la venganza personal hacia Musharraf, el general al que encumbró a jefe del ejército y que no dudó en morderle la mano con un golpe de Estado.

Para el líder de la PML-N –el vencedor real de las elecciones ya que su partido devoró a la gobernante PML-Q– el acercamiento al PPP tiene como objetivo garantizarse cuanto antes el final de Musharraf. El viudo de Bhutto, sin embargo, necesita un tiempo para hacerse con los hilos del poder de una formación política que se resquebraja frente a su liderazgo. Zardari, antes de precipitarse hacia el mejor postor, pondrá en la balanza los *tempos* que mejor se adecúan a su aspiración de saltar al Gobierno una vez que gane su escaño.

El PPP se rompería si el poco respetado Zardari negociara abiertamente con el dictador caído, pero tampoco le cierra la puerta definitivamente. En una entrevista con *The Wall Street Journal*, Zardari insistía en que no quiere la confrontación sino “una transición tranquila hacia la democracia” y apuntaba la necesidad de trabajar con Musharraf: “La cruda realidad es que no tenemos una mayoría de dos tercios en las dos cámaras”.

Oficialmente, el PPP está abierto a negociar con todos los partidos menos con la PML-Q. De hecho, ha entablado contactos con el MQM, el partido que representa a la minoría mohayir de la sureña provincia de Sind, feudo de los Bhutto. El MQM, que formaba parte de la coalición gubernamental, resultó, como es habitual, el partido más votado en Karachi, la capital de Sind, una megalópolis de 12 millones de habitantes. La única condición impuesta por Zardari para entrar en el gobierno de consenso que pretende formar es el apoyo a la investigación del asesinato de su popular esposa.

Su muerte, que conmocionó al país y encerró a la población en sus casas durante tres días de huelga general, seguida como nunca se había visto en Pakistán, desató una extraordinaria polémica por la burda

forma en que el Gobierno trató de tapar los hechos. El primer ministro en funciones, Mohamedmian Somro, se vio obligado a pedir públicamente disculpas por la versión sobre la muerte de la ex primera ministra facilitada por el portavoz del

Ministerio del Interior Yaved Iqbal, Cheema. Según Cheema, Bhutto murió porque se clavó en la cabeza la palanca del techo del coche blindado al golpearse por efecto de la onda expansiva de la bomba de un suicida. Semanas después, cuando emitió su informe el equipo de Scotland Yard invitado por Musharraf para acallar las voces que acusaban a las “instituciones del Gobierno” de estar detrás del atentado, también se decía que la muerte la causó la palanca. Ni unos ni otros realizaron la autopsia al cadáver.

En contra de esta versión, la cadena pakistani de noticias en inglés *Dawn* emitió el video de un aficionado en el que se veía a un hombre joven, bien rasurado, vestido a lo occidental, con gafas oscuras y con aspecto de agente secreto sacar una pistola y disparar contra la líder del PPP, que cae al interior del coche. Detrás de él, envuelto en el tradicional manto pashtún, aparecía el supuesto suicida, que instantes después se hacía estallar matando a otras 23 personas. Hay otro video que abunda en la misma tesis.

Cheema, además, aseguró que tenía pruebas de que el asesinato había sido ordenado por Baitulá Mehsud, el hombre

más buscado de Pakistán por su supuesta conexión con Al Qaeda y uno de los jefes tribales de Waziristán Sur, zona fronteriza con Afganistán. Cuando al día siguiente, el rebelde negó toda conexión con el magnicidio, el funcionario se preguntó: “¿Por qué debería aceptar que lo ha hecho?”. Y añadió: “No creo que nadie tenga capacidad de preparar tales ataques suicidas salvo su gente”.

Bhutto había escapado ilesa del primer intento de acabar con su vida el 18 de octubre, cuando volvió a Pakistán tras casi ocho años de exilio. En ese atentado murieron 143 personas. La ex primera ministra nos dijo días después a un grupo reducido de periodistas que había enviado una carta al presidente con los nombres de tres altos funcionarios del régimen de Zia, recuperados por Musharraf, que podían estar detrás de ese y de cualquier otro ataque contra su vida. Posteriormente se filtró que uno de ellos es el director del Buró de Inteligencia (IB), el general retirado Eyaz Sha.

Musharraf se ganó la hostilidad de la mayoría de la población al ordenar el asalto, en julio de 2007, de la Mezquita Roja de Islamabad. En el recinto se había atrincherado un grupo de militantes bien pertrechados y centenares de chicas

“ [La muerte de Benazir Bhutto] conmocionó al país y encerró a la población en sus casas durante tres días de huelga general, seguida como nunca se había visto en Pakistán, desató una extraordinaria polémica por la burda forma en que el Gobierno trató de tapar los hechos. ”

estudiantes de la *madraza* adyacente, que dirigía el venerado clérigo integrista Abdul Rashid Gazi. Pretendían –secuestraron también a un grupo de chinos– lanzar un pulso al Gobierno e imponer la *sharía* (ley islámica) en el país. Después de darle largas sin saber cómo

abordar la crisis, se ordenó un asalto a sangre y fuego. Los hechos siguen sin investigarse. Oficialmente, además del *maulana*, hubo un centenar de muertos, incluidos algunos soldados, pero islamistas, activistas de derechos humanos y la inteligencia india sostienen que murieron alrededor de 300 personas, la mayoría estudiantes.

Tras esta matanza, los extremistas desataron en protesta una ola de violencia que se cobró la vida de unas 350 personas, la mayoría militares, en tres devastadores atentados suicidas, lo que hundió aún más la imagen de Musharraf. Incapaz de proteger a sus efectivos, el régimen ordenó a los militares que sólo vistieran el uniforme cuando fuera estrictamente necesario. Según el teniente general retirado Talat Masud, un velo de vergüenza cayó sobre la institución más prestigiosa del país. A su vez, la analista Aisha Ahmed resalta que “por primera vez, desde la guerra de 1971 –cuando Bangladesh se separó de Pakistán– el ejército se ha convertido en el objetivo del ataque de las fuerzas contrarias al Estado”.

Otro de los giros fundamentales que las elecciones han trazado en el mapa político pakistani ha sido el fin del islamis-

mo radical en una de las regiones más conflictivas, la Provincia Fronteriza del Noroeste (NWFP, en sus siglas en inglés). Allí los votantes propinaron a los *maulanas* una espectacular derrota, que fuerza a nivel nacional su retirada a las mezquitas. El desencanto ante la falta de gobernabilidad, la corrupción rampante y el temor a la *talibanización* de Pakistán rompieron el apoyo de la población a la MMA (Mutahida Majlis e Amal), una coalición de seis partidos islamistas que en las elecciones de 2002 se hizo con el Gobierno de esa provincia fronteriza con Afganistán.

La MMA, que oficialmente estaba en la oposición al régimen de Musharraf aunque se alimentó y se formó bajo el paraguas de éste, sacó tan sólo 10 escaños de los 96 de la Asamblea de NWFP y en la nacional vio reducirse el número de sus diputados a 6, frente a los 59 que tenía en el Parlamento saliente. Su vacío lo ha llenado el Partido Nacional Awami (ANP), una formación secular nacionalista pashtún, fundada en 1986 y barrida en 2002 por la ola de solidaridad lograda por los maulanas contra los bombardeos estadounidenses de Afganistán.

El nacionalismo pashtún, aplastado desde los tiempos del imperio británico, renace como revulsivo de los intentos del poder central de convertir a los pashtunes en el “chivo expiatorio” de los males del país; contra el yihadismo creciente en su territorio y contra el asentamiento de la teocracia en Pakistán. Los más de 41 millones de pashtunes se encuentran divididos por la llamada Línea Durand, trazada por el imperio británico en 1893 después de dos guerras contra Afganistán, que acabaron en tablas. Los pashtunes nunca reconocieron esta división que dejó a los miembros de una misma etnia adscritos a entidades políticas diferentes, pero fue la que sirvió para trazar la frontera del nuevo Estado cuando los británicos se fueron en 1947.

En Pakistán viven unos 27 millones de pashtunes, cerca del 16% del total de la población del país, además de dos millones de refugiados afganos, llegados a lo largo de las casi tres décadas de guerras que azotan ese país. En Afganistán hay 12 millones de pashtunes que suponen el 42% de la población.

La frontera que separa Pakistán y Afganistán, de 2.430 kilómetros de longitud a través de altas montañas, valles y desiertos, fue siempre, y sigue siendo, muy permeable. Bandidos, traficantes y guerrillas y civiles se filtran sin que las fuerzas fronterizas de uno y otro Estado puedan impedirlo. A instancias de EEUU, Islamabad ha comenzado la cons-

trucción de un muro en las zonas más conflictivas, pero Kabul lo rechaza porque supone aceptar una frontera sobre la que aún no se ha llegado a un acuerdo.

El ANP centró esta campaña electoral en el cambio del nombre de NWFP por el de Pajtunjua (“tierra de pashtunes”) y en la necesidad de negociar con los extremistas para buscar la paz. Para ello, sostiene que impulsará el restablecimiento de la autoridad tribal a través de los consejos de venerables (*Loya Yirga*) y exigirá la integración a todos los efectos en la provincia de las Áreas Tribales de Administración Federal (FATA).

Las FATA, una franja fronteriza con Afganistán que incluye siete zonas tribales con unos 3,5 millones de habitantes, son históricamente un territorio indómito de guerreros, bandoleros y contrabandistas, que cabalgaron entre la civilización persa y la india. En la actualidad, la marginación impuesta por los jefes tribales con respecto a un Estado que brilla por

su ausencia en cuanto a facilitar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de educación y salud –el 82% de la población es analfabeta– y la pobreza en que sobreviven han convertido estas zonas en caldo de cultivo del integrismo islámico.

El ejército pakistaní se adentró por primera vez en las FATA en 2001 para perseguir a tali-

banes y a miembros de Al Qaeda que huían del vecino país. En la actualidad, están destacados en la zona alrededor de 100.000 miembros de las fuerzas de seguridad. Las continuas operaciones militares que realizan han forzado el desplazamiento de más de 50.000 civiles (según Internacional Crisis Group) y la muerte de miles de personas.

El ANP sostiene que la presión de Washington para que el ejército pakistaní siga bombardeando las FATA, donde el espionaje estadounidense asegura que vuelve a reagruparse una Al Qaeda fortalecida por el dinero de la droga de Afganistán, lo que contribuye a la radicalización de los militantes y de sus familias. A instancias de EEUU y Pakistán, muchas de esas familias enviaron a sus hijos, junto con los *muyahidin* afganos, a luchar contra los soviéticos en Afganistán después de que se educaran y entrenaran en las *madrazas* construidas por los saudíes con conocimiento de EEUU durante la década de los ochenta.

El ANP apuesta por la mejora de la educación y el empleo como métodos para frenar el integrismo religioso, al que culpa de impedir el desarrollo de la provincia. La aparición de nuevos focos de insurgencia en el interior de la NWFP y

“ Musharraf se ganó la hostilidad de la mayoría de la población al ordenar el asalto, en julio de 2007, de la Mezquita Roja de Islamabad. (...) Tras esta matanza, los extremistas desataron en protesta una ola de violencia que se cobró la vida de unas 350 personas, la mayoría militares, (...) [que] por primera vez, desde la guerra de 1971 (...) fueron el objetivo del ataque de las fuerzas contrarias al Estado” .

los choques sectarios entre sunnitas y chiíes en la zona tribal de Kurram preocupan seriamente no sólo a Islamabad, sino también a esta formación política, que lidera Asfandiar Wali Jan.

Según Musharraf, uno de los problemas que le llevó a decretar el estado de excepción fue la necesidad de intervenir en el valle de Suat, unos 100 kilómetros al norte de Islamabad. Como sucedió en la Mezquita Roja, la brutal operación le reportó más críticas que apoyos, aunque también, como en Lal *masyid*, nadie duda de que había que acabar con la insurrección, pero en ninguna de las dos ocasiones se intentó un diálogo serio.

En el idílico enclave, que fue un centro de atracción turística hasta hace unos años, se habían hecho fuertes los militantes de la ilegal Alianza para la Imposición de la Ley Islámica (TNSM) con el apoyo de varios miembros de Al Qaeda. El general Ahmed Pashar, director de operaciones militares, aseguró que había al menos una cincuenta de "extranjeros terroristas de Al Qaeda", buena parte de ellos uzbekos, pero también tayikos y árabes.

Contra ellos avanzaron unos 1.500 soldados con tanques y artillería pesada, en apoyo de los 15.000 miembros de las fuerzas de seguridad que tenían cercado el valle.

La TNSM está dirigida por el clérigo protalibán pashtún Fazlulá, conocido como *Maulana Radio* por las encendidas arengas que hacía a través de su emisora para incitar a la guerra santa contra los invasores estadounidenses. La TNSM prohíbe el urdu –la lengua nacional de Pakistán– en sus *madrazas* y aboga por el establecimiento de un Pashtunistán independiente gobernado por la *sharia*. El Gobierno asegura que muchos de los suicidas que cometen los atentados son miembros de esta alianza, a la que pertenecían también algunos de los militantes que se atrincheraron en la Mezquita Roja y murieron en el asalto del ejército.

La operación en el valle de Suat fue criticada duramente por

maulanas como Rahat Husain, que predica en el distrito de Sangla, en el mismo valle. Husain, al igual que el fundador del MMA, Qazi Husain Ahmed, sostiene que antes de recurrir a la fuerza bruta deberían de haberse buscado mediadores en el conflicto y que él podía haber llevado la negociación. Qazi, que ha sido detenido en numerosas ocasiones por sus soflamas contra EEUU aunque condenó rotundamente los atentados del 11-S, insiste en que Pakistán se fundó como un Estado islámico y, por tanto, "la *sharia* debe de ser la única ley que gobierne el país".

"Nawaz Sharif, un islamista moderado, es consciente de que con un 80% de la población dedicada a la agricultura y sin haber realizado la siempre aplazada reforma agraria, la convergencia del islamismo radical con la frustración del campesinado puede convertirse en una bomba de relojería."

La operación en Suat y las intervenciones del ejército en las zonas tribales son vistas por el 15% de la tropa y algunos oficiales que pertenecen a la etnia pashtún como actuaciones mercenarias dictadas por Estados Unidos contra sus hermanos. Muchos se resisten a disparar. Para los analistas de defensa, esto es lo que ha permitido los espectaculares secuestros de hasta 300 militares llevados a cabo por Baitulá Mehsud, el principal líder rebelde la zona tribal de Waziristán Sur y el hombre que, según el Gobierno, ordenó el asesinato de Bhutto.

Los soldados, capturados en agosto, fueron retenidos más de dos meses y Mehsud se permitió el lujo de soltar de vez en cuando a alguno para forzar la negociación. Finalmente, el Gobierno aceptó la liberación de 25 talibanes, algunos con historial terrorista, lo que molestó profundamente a EEUU, a cambio de 230 soldados.

Nawaz Sharif, que tiene su feudo en Punjab, la provincia más rica y más poblada de Pakistán (más de 90 millones de habitantes) y en la que la PML-N se ha alzado con la victoria electoral, se ha manifestado a favor de "buscar una solución negociada" a la creciente insurgencia que, procedente de las FATA, se filtra por NWFP y penetra en Punjab. Sharif, un islamista moderado, es consciente de que con un 80% de la población dedicada a la agricultura y sin haber realizado la siempre aplazada reforma agraria, la convergencia del islamismo radical con la frustración del campesinado puede convertirse en una bomba de relojería.

Por otra parte, el hecho de que el 85% de los militares pakistaníes sean de la provincia de Punjab, exacerba las tensiones separatistas que amenazan con romper el país. Punjab nutre las filas castrenses y la burocracia nacional, sin tener en cuenta el agravio que supone para los habitantes

de las demás provincias: sines, baluchíes y pashtunes.

En la actualidad, la mayor amenaza a la integridad de Pakistán no proviene de la NWFP sino de Baluchistán, contra cuya insurgencia de carácter separatista se ensañó Musharraf desde el

mismo momento en que dio el golpe de Estado. Esta provincia, fronteriza con Afganistán e Irán, es la menos poblada –sólo 10 millones de habitantes: el 60% baluchíes y el resto pashtunes que habitan en el norte–, pero es el granero energético del país. Su subsuelo guarda unas enormes reservas de gas, sobre todo en el sur, donde comparte 909 kilómetros de frontera con Irán.

Los partidos baluchíes formaban parte del Movimiento de Todos los Partidos Democráticos (APDM), que pidió el boi-

coteo a las elecciones, y fueron casi los únicos que lo llevaron hasta sus últimas consecuencias. Irónicamente esto ha convertido a Baluchistán en la única provincia en la que ha ganado la gubernamental PML-Q, aunque existen serias dudas de que pueda gobernar.

Tras el derrocamiento por EEUU del régimen talibán en Afganistán, cuyo feudo se encontraba en la sureña ciudad de Kandahar, a medio centenar de kilómetros de Queta, la capital de Baluchistán, numerosos talibanes y miembros de Al Qaeda se infiltraron en esta provincia pakistani. Musharraf utilizó entonces el apoyo estadounidense a "la guerra contra el terror" en emplearse a fondo en la limpieza, el asesinato y la tortura de las distintas guerrillas baluchíes.

El Comité de Derechos Humanos de Pakistán, que preside Asma Jahangir, tiene una lista con casi 500 desaparecidos. El intento del entonces presidente del Tribunal Supremo, Iftijar Chaudry, de exigir a los servicios secretos que presenten declaración sobre la suerte de los desaparecidos fue otra de las razones que llevaron a Musharraf a destituirle.

El año más conflictivo fue 2005, cuando las fuerzas armadas sitiaron el pueblo de Dera Bugti para acabar con el jefe rebelde Nawab Akbar Jan Bugti. La operación dejó un baño de sangre. En septiembre pasado, también murió en extrañas circunstancias el líder del ilegal Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), Nawabzada Balach Marri, y el Gobierno decretó el toque de queda en Queta para evitar que la ira de sus seguidores desatara otra matanza.

Los problemas con los baluchíes comenzaron en la década de los setenta, cuando el entonces primer ministro, Zulfikar Ali Bhutto –el padre de Benazir, ahorcado en 1979 por el régimen de Zia–, quiso poblar esas tierras con punjabíes e hindis, lo que desató una revuelta armada, aplastada brutalmente. El PPP, consciente del resentimiento baluchí, emitió el 24 de febrero pasado un comunicado en el que pedía perdón en nombre de toda la nación por "las atrocidades y las injusticias" cometidas en el pasado. Asimismo, pidió el fin inmediato de las operaciones militares que el ejército lleva a cabo en esa provincia y la puesta en libertad de todos los prisioneros políticos, incluido el nacionalista Ajtar Mengal. Además, Zardari se comprometió a hacer todo lo que esté en su mano para "curar las heridas del pasado y el terrible sufrimiento infligido" al pueblo baluchí.

Los expertos sostienen que el asesinato de Bhutto también ha encendido la mecha del nacionalismo sindi, como pusie-

ron de manifiesto los disturbios que estallaron en la provincia durante los tres días de huelga general decretados por el PPP. En el Sind rural, profundo seguidor de los Bhutto, con una economía estancada y castigado por la inflación de los productos básicos, se han agravado las tensiones con los mohayirs, que son musulmanes de origen indio y lengua urdu, que se establecieron en las ciudades de la provincia tras la partición. Musharraf es mohayir y la coalición gobernante de estos años incluía al MQM (Mutahida Qaumi Movement), el partido que se identifica con la clase media de Karachi. El secular MQM tiene el lastre de las mafias que se han infiltrado en sus filas.

El 60% de los 57 millones de habitantes de Sind son sindies, en su mayoría campesinos sometidos a las grandes familias de terratenientes feudales. El nacionalismo sindi se nutre del malestar que crea el despegue económico de los mohayirs, que son mayoría en Karachi, la capital financiera pakistani. En Karachi también están ampliamente representadas las demás etnias pakistaniés e incluso hay un numeroso contingente de pashtunes afganos.

Estados Unidos ve con suma preocupación todas estas fuerzas que amenazan con romper Pakistán, un país que posee entre 60 y 115 cabezas nucleares. Sobre todo después de que el *padre* de la bomba atómica pakistani, el científico Abdul Qadir Jan, considerado un "héroe nacional", reconociera haber facilitado información y material nuclear a Libia, Irán y Corea de Norte. La lucha de poderes que vive el país asiático desde hace casi un año ha terminado por dejar un vacío que está obligando a Washington a modificar su estrategia de considerar insustituible a Musharraf, a quien los pakistaniés llaman irónicamente *Bush-arraf*.

Al contrario de lo que el presidente esperaba después de cumplir su compromiso de "traer la democracia al país", el resultado de las elecciones parece haber abierto la puerta del cambio de la política de Estados Unidos hacia Pakistán. La embajada en Islamabad ha establecido contactos con los partidos ganadores de los comicios, incluido Nawaz Sharif a pesar de las diferencias mantenidas en el pasado, y parece ser consciente de la necesidad de cambiar de socio político para facilitar la transición. Como pretendía Bhutto, finalmente Washington ha empezado a comprender que la democracia, más que el régimen militar, puede frenar la descomposición del país.